

Santiago, veintidós de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Se reproduce la sentencia en alzada de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, con excepción de los motivos sexto a vigésimo que se eliminan.

Y SE TIENE EN SU LUGAR PRESENTE.

En lo que respecta a la excepción de reparación integral:

1° Que el abogado del Fisco la funda en que en el marco de la justicia transicional se ha otorgado reparación a los familiares de víctimas de los derechos humanos y sus familiares y, como se puede desprender de la discusión de la Ley 19.123, tal reparación comprende los aspectos morales y patrimoniales del daño sufrido por esas personas. Sostiene que dicha prestación del Estado tiene un carácter indemnizatorio, por lo que, en consecuencia, la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ya se realizó y se materializó en bonos, pensiones vitalicias y subsidios, además de otros beneficios simbólicos y pagos médicos, universidades y otros. Precizando las contraprestaciones que se otorgaron en virtud de la ley mencionada y de la Ley 19.980, relata que se trata de pensiones vitalicias, una bonificación compensatoria de un monto único equivalente a doce meses de pensión y un bono de reparación de \$10.000.000, para los hijos del causante que nunca recibieron la pensión mensual de reparación y por la diferencia que corresponda para aquellos que la recibieron, pero han dejado de percibirla.

2° Que mediante oficio que rola en folio 21, el Instituto de Previsión social informó que los demandantes recibieron por una sola vez el bono de reparación de \$ 10.000.000 establecido en la Ley 19.980 “en su calidad de hijos del causante Ley Rettig, don Osvaldo Eugenio Villavicencio Aguilera”

3° Que para resolver la excepción y como cuestión preliminar, estos sentenciadores han tenido en consideración que los hechos que sirven de fundamento a la responsabilidad extracontractual demandada ocurrieron en un período de extrema anormalidad institucional en el que los agentes estatales incurrieron en grave abusos de los derechos humanos.

4° Que en ese contexto y en virtud del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incorporado en nuestra legislación por el artículo 5° de la Constitución Política de la República, surge el derecho de las víctimas a



percibir la compensación pecuniaria correspondiente, lo que implica la reparación de todo daño que se les hubiere ocasionado, según una regla del derecho internacional consuetudinario, reconocido tanto en el sistema universal como en los sistemas regionales de protección de los derechos humanos. Es así como la infracción a un compromiso internacional del Estado -el respeto de los derechos garantizados por las Convenciones Internacionales de Derechos Humanos y otros instrumentos que conforman el Derecho Internacional de los Derechos Humanos- entraña la obligación del Estado firmante de dar reparación. Tal obligación se ha elevado al nivel de ser un principio del derecho internacional y es, sin duda, un concepto general del derecho.

5° Que sin entrar a pronunciarse todavía acerca del fondo del asunto, es menester señalar que en el ámbito de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificada por nuestro país, en su artículo 24 N° 5, nos da luces de lo que para el derecho internacional de los derechos humanos debe comprender el derecho de las víctimas a percibir una reparación, al decir que ésta “comprende todos los daños materiales y morales”. En la misma línea, el artículo 63.2. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, reconoce el principio de reparación de las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de los derechos que protege y el pago de una justa indemnización de la parte lesionada.

6° Que, amén de lo anteriormente señalado, debe mencionarse lo que los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 60/147 del 16 de diciembre de 2005, entienden debe comprender la reparación a víctima de violaciones a sus derechos fundamentales: principios 16 y 17: las víctimas tienen derecho a recibir una reparación adecuada, efectiva , y rápida (...) y proporcional a la gravedad de las violaciones y al daño sufrido, correspondiéndoles ser indemnizados por el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales, los daños



materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante y los perjuicios morales.

7° Que, en consecuencia, estos sentenciadores estiman que las personas beneficiadas con las prestaciones económicas que establece la Ley 19.213 modificada por la Ley 19.980 no se encuentran impedidas de recibir una indemnización por el daño moral sufrido, en la medida que por aplicación del principio del Derecho Internacional de reparación integral del daño, que incluye, entre otros el daño moral, el resarcimiento de dicho daño no está directa y concretamente comprendido en las reparaciones que contempla la citada ley, por lo que puede impetrarse separadamente

8° Que, además, debe tenerse en consideración que la Ley 19.123, al establecer la pensión de reparación y otras prestaciones en beneficio de las víctimas de derechos humanos y sus familiares, en ninguna parte asentó una incompatibilidad de estos beneficios con eventuales indemnizaciones que pudieren perseguirse ante los Tribunales de Justicia, y, a diferencia de esto, dejó en claro que las funciones asignadas a dicha Corporación no dicen relación con las jurisdiccionales que les corresponden en forma exclusiva y excluyente a los Tribunales.

9° Que, por otro lado, la obligación de pago derivada de la responsabilidad extracontractual del Estado de Chile no puede entenderse cumplida con el pago anterior de una pensión reparatoria pues el deber de pagar que deriva de esa clase de responsabilidad sólo nace con la ejecutoria de la sentencia que la establece. En efecto, el pago es, según disponen los artículos 1568 y siguientes del Código Civil, la prestación de lo que se debe, y debe hacerse bajo todo respecto en conformidad al tenor de la obligación, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1597 del mismo cuerpo legal, los pagos efectuados en virtud de la ejecución de la Ley N° 19.213 sólo pueden imputarse a las obligaciones que de ella nacen, como título originario de las prestaciones de que se trata, ajenas a la indemnización que por la vía extracontractual se persigue en autos.

Por las consideraciones expuestas, debe rechazarse la excepción de reparación integral interpuesta por el Fisco.

En cuanto a la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria.



10° Que la acción civil es prescriptible, pues no hay ningún cuerpo normativo -nacional o internacional- que establezca lo contrario, razón por la cual deben aplicarse las normas de derecho común del Código Civil. Aceptar lo contrario, importaría el establecimiento jurisprudencial de acciones imprescriptibles, en contra del texto expreso de la Ley, en este caso, del artículo 2497 del Código Civil, que dispone que las reglas relativas a la prescripción se aplican igualmente a favor y en contra del Estado, las Iglesias, Municipalidades, Establecimientos y Corporaciones Nacionales y de los individuos particulares que tienen la libre administración de lo suyo.

11° Que, de la cita, es posible concluir que no es efectiva la imprescriptibilidad de la responsabilidad extracontractual del Estado, ya que ni el Constituyente ni el Legislador la declaran en forma expresa, por lo cual cabe entender la vigencia de la norma general, siendo esta la prescripción, como institución básica de seguridad jurídica, plenamente aplicable a favor y en contra del Estado, según el caso.

12° Que, no obstante, y como se viene razonando, resulta pertinente aplicar al caso concreto, la institución de la prescripción consagrada en nuestro Código Civil, como también, las figuras implícitas en dicha institución, como son la suspensión, interrupción, renuncia de la prescripción, etc. En efecto, los requisitos de la renuncia a la prescripción se encuentran en las normas comunes para las prescripciones adquisitivas y extintivas, específicamente, en el artículo 2494 del Código Civil que dispone que la prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente; pero sólo después de cumplida. Se renuncia tácitamente cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor- Además, para que pueda determinarse la renuncia se requiere que la intención de renunciar sea inequívoca, es decir, que se desprenda de un hecho que suponga necesariamente el abandono de un derecho adquirido a través de actos concretos del deudor. Que, sobre el particular, se ha resuelto por la jurisprudencia que debe existir una manifestación de voluntad que sea realizada sin compensación alguna, por mera liberalidad o por moralidad, lo que debe desprenderse de los hechos en forma clara e incuestionable.

13° Así, de un atento examen de los antecedentes que obran en autos, es posible colegir que sin perjuicio de encontrarse prescrita la acción



indemnizatoria, con la publicación de la Ley N° 19.123, que creo la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación y estableció pensiones y beneficios médicos y educacionales en favor de los familiares de las personas detenidas desaparecidas y ejecutados políticos, el Estado ha reconocido su condición de deudor para con las víctimas de ejecución política, constituyendo esta ley, un acto de renuncia a la prescripción. En este mismo sentido, y a mayor abundamiento, cabe hacer presente, lo que a juicio de esta Corte constituye un acto relevante de reconocimiento expreso del Estado de Chile en esta materia. Se trata de la contestación realizada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de la demanda que interpusieran en su contra en el caso: “María Laura Ordenes Guerra y otros respecto de la República de Chile”, por la responsabilidad que le cabe al violar los derechos a las garantías y protección judiciales como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad.

14° Que, en síntesis, y en lo que nos atañe, el Estado manifestó: “[...] su voluntad de aceptar las conclusiones y las consecuencias jurídicas que de ello se derivan contenidas en el Informe de Fondo adoptado por la CIDH. En particular, reconoce que faltó al derecho a las garantías judiciales por no determinar el derecho de las presuntas víctimas a obtener una reparación en el ámbito civil. [...] Asimismo, la aplicación de la prescripción civil a las acciones judiciales interpuestas por las presuntas víctimas imposibilitó el otorgamiento de una justa reparación y dificultó hacer uso adecuado del recurso que es idóneo para reparar violaciones a derechos humanos.”

En cuanto a las reparaciones, el Estado señaló: “al no existir controversia sobre el objeto principal de este litigio internacional, lo que procede es reestablecer los derechos que se han tenido por vulnerados y determinar el pago de la indemnización a la parte lesionada”. Así, “previo a la declaración de medidas de reparación que adopte [esta] Corte, es importante para el Estado formular los siguientes alcances: en primer lugar, las causas judiciales a que se ha hecho referencia a nivel interno han sido tramitadas completamente y las decisiones pronunciadas cuentan con el carácter de cosa juzgada, lo que hace imposible jurídicamente restituir los procesos judiciales para dictar nuevas sentencias.”



(...) “No obstante, el Estado comparte que las reclamaciones de reparación por violaciones flagrantes de los derechos humanos no se encuentran sujetas a prescripción; éste es un principio que tiene asidero en la costumbre internacional, anterior a los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que el transcurso del tiempo no puede ser impedimento para que las víctimas y sus familiares obtengan una reparación integral por los daños causados. En segundo lugar, en cuanto a la naturaleza de las medidas de reparación a ser adoptadas por [la] Corte, tomando en cuenta su competencia amplia contenida en el artículo 63.1 de la CADH, el Estado es de la opinión que, dado que la presente causa se origina por la imposibilidad de que un tribunal interno conociera el fondo de una acción cuya naturaleza es indemnizatoria de perjuicios, la reparación adecuada tendiente a hacer desaparecer los efectos de la violación cometida correspondería principalmente en la determinación de una indemnización monetaria (...)”.

Lo anteriormente citado, resulta ser una manifestación expresa e inequívoca del Estado de Chile de reconocimiento de la renuncia a la prescripción.

En consideración a lo más arriba razonado y citado, debe rechazarse la excepción de prescripción interpuesta por el Fisco.

15° Que, desechadas las excepciones impetradas por la parte demandada, corresponde determinar si los demandantes sufrieron el daño moral que alegan en la demanda.

16° Que el daño moral puede ser conceptuado como un perjuicio que se sufre como consecuencia de la comisión de un hecho ilícito que, lesionando la persona o sus bienes, afecta los elementos psíquicos o espirituales que indican en el normal desarrollo del ser humano.

17° Que los demandantes alegan haber padecido un daño moral en la circunstancia de ser hijos de Osvaldo Eugenio Villavicencio Aguilera, quien, en el contexto de los primeros meses de represión ocurridos tras el golpe militar de 11 de septiembre de 1973, fuera ejecutado durante la vigencia del toque de queda el 4 de diciembre de ese año, por lo que tanto la Corporación de Verdad y Reconciliación lo declaró víctima de la violencia imperante en la época.



18° Señalan que la muerte de su padre les acarreó una serie de consecuencias negativas, como allanamientos practicados por militares, sentimientos de temor, penurias económicas e incluso hambre. Sostienen que para determinar el impacto de los padecimientos que sufrieron debe tenerse en consideración la escasa edad que tenían al momento de los hechos – entre 5 y 8 años - y que con los años se enteraron de lo que realmente ocurrió a su padre, víctima de la violencia política imperante en la época, todo lo cual les ha provocado una gran ansiedad social y problemas de confianza con el resto de la gente que han repercutido en su vida adulta y en todo ámbito social

19° Que, analizada la prueba rendida conforme a las reglas del Código de Procedimiento Civil, es posible concluir que Viviana Soledad, Susana Consuelo. Leonardo Eugenio, Irene del Carme. Jeannette Eugenia, todos Villavicencio Bustamante son hijos de Osvaldo Eugenio Villavicencio Aguilera, fallecido el 4 de septiembre de 1973 en Quilicura a causa de “2 heridas de bala cráneo encefálica una con salida de proyectil y otra sin salida de proyectil”; que Osvaldo Eugenio Villavicencio Aguilera tiene la calidad de víctima de la violencia política que vivió nuestro país tras el golpe militar de 1973; que, a consecuencia de la muerte de su padre Leonardo Eugenio Villavicencio Bustamante presenta un duelo patológico crónico debido a que nunca pudo ver el cuerpo de su padre, lo que ha determinado que ha debido soportar una carga emocional que configura un modo de sufrimiento psicológico permanente, configurándose a su respecto un daño psíquico, orgánico, social y moral; que en lo que respecta a Viviana Villavicencio Bustamante, la muerte de su progenitor y otros hechos de violencia política posteriores le han producido secuelas psicológicas compatibles con un cuadro de estrés postraumático de carácter crónico y recurrente asociado a sintomatología depresiva que ha significado un deterioro permanente en su calidad de vida, sus oportunidades laborales y económicas; que, en lo que toca a Irene del Carmen Villavicencio Bustamante, la ejecución de su padre le ha provocado un daño debido a experiencias traumáticas extremas por violencia política en relación a un ejecutado político; y que en cuanto a Jeannette Eugenia y Susana Consuelo Villavicencio Bustamante se pudo establecer tras la muerte de su padre que sufrieron graves vulneraciones a



sus derechos humanos y que presentan un daño psicológico permanente e importante que se manifiesta como un trastorno ansioso depresivo.

20° Que el daño moral causado a los demandantes se relaciona causalmente con la conducta ilícita de los funcionarios o agentes del Estado autores del ilícito de lesa humanidad en que se funda la presente acción, por lo que debe ser indemnizado por el Estado, toda vez que, los actores han padecido un dolor, un sufrimiento, angustia y daños psicológicos por la muerte de su padre, sentimientos que los han acompañado toda la vida.

21° Que debe tenerse presente que el sistema de responsabilidad extracontractual del Estado que nos ocupa está construido en base a normas de carácter constitucional y legal, siendo la más importante, por su jerarquía, la contenida en el artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política del Estado que dispone que “Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño”. Enseguida, el artículo 3° de la Ley 18.575, que dispone que la Administración del Estado está al servicio de la persona humana, que su finalidad es promover el bien común, y que uno de los principios a que debe sujetar su acción es el de responsabilidad.

En base a las dos disposiciones antes transcritas, corresponde entonces al Estado indemnizar a los demandantes por el daño moral sufrido por los demandantes como consecuencia de la muerte de su padre y las ulteriores consecuencias negativas que este hecho les acarreó en sus vidas.

22° Que, en consecuencia, este tribunal estima que concurren en este caso los requisitos de procedencia de la indemnización por daño moral reclamada, por lo cual corresponde abordar la determinación del monto de la misma, la cual, según lo pedido en la demanda alcanza a los \$2.000.000.000, es decir \$ 400.000.000 para cada uno de los demandantes, o bien, el monto que el sentenciador establezca.

23° Al respecto, se tiene presente que, además de las dificultades de prueba del daño moral, los tribunales se enfrentan a la dificultad de traducir lo que es un concepto intangible en una realidad monetaria (Hernán Corral Talciani, “Lecciones de responsabilidad civil extracontractual”, Editorial



Jurídica, año 2011, página 167). En este sentido, y conforme al mérito de la prueba incorporada, se advierte que los demandantes sufrieron daños psicológicos como efecto del trágico fallecimiento de su padre a manos de agentes del Estado, lo cual evidentemente incide en la configuración del daño moral ya descrito en el fundamento decimosexto, causado por el hecho ilícito. Con todo el tribunal advierte que, de las pruebas aportadas, no se advierten elementos de convicción que permitan determinar en forma suficiente, precisa y concordante, la magnitud y efectos de los daños psicológicos sufridos por los demandantes y tiene presente además para regular prudencialmente el daño sufrido, el bono que los demandados recibieron en virtud de la Ley 19.980 como única retribución del Estado, cuyo monto, si bien no repara integralmente el daño sufrido, debe tenerse en consideración para decidir prudencialmente y en justicia el monto de la indemnización, que se regula en \$20.000.000 para cada uno de los demandados, más los reajustes e intereses que se devenguen desde la fecha que aquélla quede firme y ejecutoriada y el deudor hubiere sido reconvenido, respectivamente.

24° Que, en cuanto a la defensa subsidiaria de la demandada, referida a la regulación de la indemnización por daño moral, corresponderá acogerla parcialmente, en razón de lo señalado en el motivo anterior

25° Que, en lo relativo a la defensa de la demandada consistente en la improcedencia de reajustes e intereses en la forma que indica, esta Corte es de la opinión que mientras no exista sentencia firme y ejecutoriada en una causa, ninguna obligación de indemnizar puede corresponderle a la parte vencida.

26° Que las demás probanzas rendidas en autos, en nada alteran los fundamentos y las conclusiones de esta sentencia.

27° Que, en cuanto a las costas solicitadas por la demandante, la Corte no accederá a esta petición, por no haber resultado totalmente vencido el demandado, según lo previsto en el artículo 144 del Código del ramo.

Por estas consideraciones, y visto, además, lo dispuesto en el Título XXXV y los artículos 2332, 2492, 2497, 2515 y 2514, todos del Código Civil; y los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se revoca** la sentencia en alzada, dictada por el Octavo Juzgado Civil de Santiago y, **en su lugar se declara** que se acoge la demanda deducida, solo en cuanto:



A) Que se desestima la excepción de reparación integral del daño opuesta por el demandado, en virtud de lo decidido en el motivo octavo.

B) Que se desestima la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado, en virtud de lo dispuesto en el apartado décimo cuarto.

C) Que se acoge parcialmente la acción indemnizatoria entablada en autos, en conformidad con lo establecido en los basamentos vigésimo tercero y cuarto, y, en consecuencia, se declara que se condena al Fisco a pagar a cada uno de los demandantes la suma de \$20.000.000, (veinte millones de pesos), por concepto de indemnización por daño moral;

D) Que se acoge parcialmente la defensa del demandado relativa a la regulación de la indemnización cobrada, conforme a lo dispuesto en el numeral vigésimo cuarto.

E) Que se acoge la defensa de la demandada relativa al reajuste e intereses cobrados, conforme a lo establecido en el motivo vigésimo quinto.

F) Que no se condena en costas al demandado, en virtud de lo dispuesto en el considerando vigésimo séptimo.

Regístrese, notifíquese a las partes y oportunamente archívense estos antecedentes.

Se previene que el abogado integrante Sebastián Hamel Rivas, concurren a la revocatoria del fallo, pero fijando prudencialmente la indemnización en favor de los demandantes en \$ 40.000.000

Redacción del abogado integrante Sebastián Hamel Rivas

Regístrese y comuníquese.

Redacción del abogado señor Hamel.

Civil N° 17.617-2022.

No firma el abogado integrante señor Hamel, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por ausencia.



Pronunciado por la Sexta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministra Maria Paula Merino V. y Ministro Suplente Sergio Enrique Padilla F. Santiago, veintidós de mayo de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veintidós de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

